

Foto: La República



# ¿A dónde nos lleva el punto de quiebre?

*Con el Estado de Emergencia Alejandro Toledo repite el error de querer asegurar la gobernabilidad del país colocando la democracia bajo la tutela de las Fuerzas Armadas. Una nueva “abdicación democrática”.*



**Fernando Gutiérrez**  
Periodista

**G**obernabilidad o democracia, parece ser la disyuntiva fatídica de los gobernantes latinoamericanos de la era neoliberal. Jamil Mahuad, Carlos Menen, Alberto Fujimori y Fernando Cardoso respondieron con la fuerza militar a las “embestidas sociales” que rechazaban sus programas económicos. Así defendieron la viabilidad política de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

En el Perú, desde 1992, la política neoliberal se sostuvo en un régimen autoritario, represivo y mafioso, muy bien disfrazado con consultas electorales periódicas. El equilibrio en las cifras macro nunca se tradujo en una mejora del nivel de vida de las mayorías pobres. El saldo final fue una economía interna más debilitada y endeudada, con mayor dependencia del capital extranjero, el crecimiento descomunal de la corrupción y la ingobernabilidad del país pese a que el terrorismo había sido casi totalmente derrotado.

## **Toledo repite la historia**

Alejandro Toledo prometió realizar una “reingeniería presupuestal” para atender la enorme deuda social que dejó el Fujimorato. Asimismo, se propuso dar estabilidad política al país con el Acuerdo Nacional y un gabinete “de todas las sangres”. Sin embargo, a dos años de su gestión, la insatisfacción popular y la inestabilidad política dominan la escena.

La ingobernabilidad se volvió a instalar en el país. Si antes esa situación favoreció la derrota de la mafia fujimontesinista, hoy amenaza seriamente al régimen democrático. ¿Cómo se llegó a tan indeseada realidad?

Una primera causa es la tendencia del presidente Toledo a no cumplir sus promesas. En el sur, por ejemplo, el pueblo arequipeño tuvo que movilizarse hasta lograr que Toledo cumpla con el compromiso firmado de no privatizar las empresas eléctricas del sur. Otro importante revés político para el gobierno fue la huelga indefinida de los maestros del SUTEP, gremio que le arrancó un acuerdo salarial no previsto por el gabinete Solari; lo que, a su vez, llevó a la crisis que concluyó

en la designación de Beatriz Merino como nueva Premier y la remoción de Javier Silva Ruete de Economía y Finanzas.

Una segunda causa tiene que ver con el origen del gobierno. Alejandro Toledo fue un invento de la población. Su gobierno surgió de un proceso de recuperación de la democracia donde los actores principales fueron las grandes mayorías. De allí que –desde su nacimiento– éste se vio atrapado entre las urgentes demandas sociales, de un lado, y la presión de las transnacionales y el empresariado nacional, de otro, que le exigen continúe el curso neoliberal de su antecesor. La expresión política de esta situación embarazosa fue su primer gabinete ministerial, autodenominado “de todas las sangres”. El ensayo, como sabemos, resultó dañado de cabo a rabo. Con el gabinete Solari fue peor: el partido que se juntó para improvisar, terminó llevando a su presidente al borde del abismo, con casi 80% de rechazo popular, según las encuestas.

La tercera causa aparece con el estado de emergencia decretado a fines de mayo por el Ejecutivo y respaldado por el Congreso. En ese mes, las luchas de los maestros y los productores agrarios generaron condiciones para el estallido de la movilización general de todos los sectores populares descontentos. La respuesta de Alejandro Toledo fue poner la democracia bajo la tutela de las Fuerzas Armadas y Policiales, para garantizar la gobernabilidad del país y la salud de su gobierno; el precio que pagó por el encargo fue devolverles antiguos privilegios presupuestales y detener los procesos de reorganización en las instituciones castrenses.

De ese modo, Toledo repite el error de los Mahuad, Fujimori, Menen y Cardoso: reprimir al pueblo para intentar salvar la “gobernabilidad” del país, vale decir, la vigencia y viabilidad política del plan neoliberal, cuestionado por las demandas y luchas sociales. La historia latinoamericana reciente nos enseña que ese camino lleva a una mayor ingobernabilidad, en tanto polariza a las mayorías populares y hace estéril cualquier política de acuerdo nacional.

### Más de lo mismo

Asistimos, entonces, a una nueva versión de lo que la CVR ha calificado certeramente como “abdicación democrática”, vale decir, la renuncia por parte de un gobierno democrático a utilizar las armas de la democracia (negociación, concertación, consultas, real participación) para atender las demandas sociales y dar así estabilidad política al país.

Si el “punto de quiebre” de Toledo le da mayor protagonismo a las instituciones castrenses en el escenario político nacional, en el aspecto económico-social, evade las promesas hechas al pueblo (no las podré cumplir,

dijo Toledo en entrevista con el periodista Alejandro Guerrero): no habrá más empleos ni mejores remuneraciones; educación, salud y el agro no recibirán los recursos prometidos; los servicios básicos seguirán siendo los más caros de Latinoamérica; en el presupuesto nacional se continuará priorizando el pago de la deuda externa y los mayores gastos militares. En cambio, el pueblo peruano tendrá que pagar un mayor impuesto por lo que consume todos los días, hasta que se apruebe la prometida “reforma tributaria”.

En los temas corrupción y violencia también hay más de lo mismo. El caso del canal 5, por ejemplo, confirma que en tres años de transición democrática no se hizo nada para reformar el Poder Judicial; recientes encuestas dan la razón a quienes piensan que en el Perú “todo juez es corrupto hasta que no demuestre lo contrario”. La disputa por el canal 5, además, ha hecho evidente la influencia de ciertos agentes económicos en las altas esferas del poder.

Las Fuerzas Armadas, fortalecidas por las medidas de emergencia, hicieron campaña pública para evitar que la CVR las señalen como responsables de acciones genocidas, pretendiendo, en cambio, que se justifique su actuación anterior como ejemplo para futuras situaciones críticas. Por otra parte, el “punto de quiebre” les da la justificación política a los remanentes de Sendero Luminoso para volver a la palestra nacional.

### Punto de quiebre o punto final

La democracia corre peligro. Una vez más será necesario que la población se movilice, como en el 2000, para defenderla y ampliarla. Pero en esta ocasión esa movilización llevará al rechazo frontal de la política neoliberal que se aplica en el Perú desde hace 13 años.

En medio de la lucha popular, es factible que la voz neoliberal que se opone a la permanencia de Toledo en la presidencia de la república se convierta en mayoritaria en las altas esferas empresariales. El razonamiento que mueve a estos sectores –expertos en defender sus intereses económicos– es simple: si Toledo no garantiza la tranquilidad para hacer negocios, debe irse antes del 2006. Esa discusión ya ha empezado, lo que aún no pueden discernir es si será necesario un adelanto de elecciones o sólo ungrir a Raúl Díez Canseco como su reemplazante constitucional.

Tal vez el Acuerdo Nacional sirva para zanjar esa disyuntiva en las alturas, cuando el caso lo amerite; aunque no se puede descartar que, dado el alto grado de descrédito popular que afecta a los partidos políticos y al Congreso de la República, sean las Fuerzas Armadas –hasta hace muy poco sostén del fujimontesinismo– las que desempeñen el papel más importante en el desenlace político. Estamos advertidos.